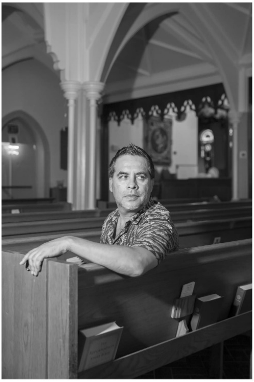
OUR LOCAL CORRESPONDENTS AUGUST 24, 2020 ISSUE

EL SACERDOTE RENEGADO QUE AYUDA A LOS INDOCUMENTADOS A SOBREVIVIR A LA PANDEMIA

Juan Carlos Ruiz, un pastor mexicano que vive en Brooklyn, hace de todo: desde defender los derechos humanos hasta entregar comestibles.

By Jonathan Blitzer

August 19, 2020



Juan Carlos Ruiz tiene la reputación de ser un defensor dedicado a su comunidad. Fotografía de Gaia Squarci para The New Yorker

Leer en inglés | *Read in English*

En marzo, Victorino Narcizo desarrolló una tos seca. Él y su cuñado Fidel, inmigrantes indocumentados que vivían juntos desde hace una década, no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. El jefe de Narcizo había amenazado con despedirlo si perdía un turno. Su madre, en México, dependía del dinero que enviaba a casa, así que decidió seguir trabajando. Tenía veinticinco años y, por lo demás, buena salud; dudaba que sus síntomas fueran graves. Fidel, sin embargo, argumentó: "Quédate en casa y mejora. Hay trabajo en todas partes. Esto es Nueva York". Narcizo y Fidel se movían por la ciudad como un dúo, más como mejores amigos que como familia política, y compartían un apartamento tipo estudio en Harlem con dos compañeros de habitación que trabajaban en cocinas de restaurantes, tal como ellos.

Unos días después, Narcizo se despertó sin aliento, y él y Fidel se apuraron para llegar al hospital Mount Sinai Morningside, en la avenida Amsterdam. La sala de espera estaba abarrotada y un enfermero con cubrebocas y bata lo interceptó. "¿Por qué lo trajiste aquí?", le preguntó a Fidel. "Vas a enfermar a otras personas". Fidel intentó responder, pero su inglés trastabilló; se fueron aturdidos, con Narcizo apoyado en su cuñado. Finalmente, un amigo bilingüe los acompañó al hospital Bellevue, donde Narcizo fue ingresado. Fidel nunca lo volvió a ver. Narcizo murió el 1 de abril, uno de los veintiún mil neoyorquinos que sucumbieron a la COVID-19 esta primavera.

Las siguientes semanas fueron una confusión de luto y de logística. Fidel le dio la noticia a la familia de Narcizo, que vive en el estado mexicano de Guerrero, y trató de recaudar dinero para la cremación entre amigos en Facebook. Pero como las empresas cerraron en respuesta a la pandemia, algunos de los amigos habían perdido sus trabajos y no tenían nada con que contribuir. Fidel siguió yendo a trabajar en un restaurante de sushi en el centro de Manhattan, mientras intentaba encontrar a alguien que se mudara al apartamento para cubrir el alquiler. Lo consumía una pregunta que no tenía ni tiempo ni energía para responder: si también había estado expuesto al virus, ¿por qué se salvó? Dos semanas después, el hospital llamó para advertir a Fidel que los funcionarios de la ciudad enterrarían a Narcizo en una fosa común si no hacía otros arreglos. Cuando Fidel comenzó a llamar a los familiares de Narcizo en Nueva York para pedirles consejo, un tío que acababa de ser despedido como sandwichero en una tienda de delicatessen del Bronx le dio el nombre de alguien que podría ayudar: Juan Carlos Ruiz, un pastor mexicano de cincuenta y un años que dirige una congregación en Bay Ridge, Brooklyn.

Entre los inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva York, Ruiz tiene fama de ser un defensor dedicado e implacable de su comunidad. Todo el mundo parece conocerlo o conocer a alguien que lo conoce, y no es difícil ver por qué. Un día reciente entregó comidas en tres apartamentos, recibió un camión lleno de alimentos donados por un tendero del Bronx, habló en una manifestación callejera en solidaridad con los trabajadores esenciales y visitó un hospital local para identificar los restos de un inmigrante. Otros pastores simplemente le han dado las llaves de sus iglesias. Últimamente, con una frecuencia sombría, ha hecho arreglos para entierros con descuento en una funeraria en Park Slope dirigida por un viejo amigo. Ruiz tiene parientes en Puebla y Guerrero y, debido a estos vínculos, los funcionarios y defensores de los derechos humanos de allá también dan su número de teléfono.

Ruiz, cerca de Red Hook, Brooklyn, lleva comida para distribuir a las familias. Fotografía de Gaia Squarci para The New Yorker

Durante su conversación telefónica, Ruiz le dijo a Fidel: “Yo me encargo de todo”.

Una fresca mañana de lunes, en mayo, me encontré con Fidel en la iglesia El Buen Pastor, un austero edificio de piedra gris con puertas rojas en la esquina de la Cuarta avenida y Bay Ridge Parkway. Un primo y dos amigos lo acompañaban—todos vestían sudaderas con capuchas negras y usaban mascarillas quirúrgicas —sentados en silencio alrededor de una mesa plegable dentro de la iglesia vacía. Habían viajado en metro durante una hora y media, desde el Alto Manhattan y el Bronx, para asistir a un funeral que Ruiz había organizado de forma gratuita.

Ruiz entró unos minutos después, con una bata blanca, seguido por su perro, un Bichón Habanero que ladraba mucho y llevaba un suéter. Ruiz es bajo y esbelto, luce una barba que sigue la línea de su barbilla y quijada, usa anteojos de montura cuadrada, y tiene el aire de quien está en constante actividad. Saludó a Fidel chocando los codos y guió a los hombres a las bancas, instruyendo a cada uno a sentarse en su propia fila. La esposa de Ruiz, Cinthya Briones, antropóloga y fotógrafa, entró con una cámara, y un amigo suyo, un oaxaqueño llamado Próspero, quien ha trabajado como voluntario en la iglesia durante el último año, instaló una videograbadora. “Quieres que podamos filmar esto, ¿verdad?”, le preguntó Ruiz a Fidel, quien asintió. Tenía planeado enviar imágenes de la ceremonia a la familia de Narcizo. Para la ocasión había un programa sencillo, con una fotografía de Narcizo en blanco y negro, sonriendo, con una gorra de chef. Una urna con sus cenizas estaba colocada sobre una pequeña mesa de madera.

Haciendo un gesto hacia ella, al comenzar la ceremonia, Ruiz dijo: “El dolor es un gran abismo que nos invita a realizar un acto de fe”. Enumeró las dificultades que los hombres habían soportado: la muerte de Narcizo, sus perspectivas laborales cada vez más oscuras, la añoranza de su tierra, los temores de contraer el coronavirus y los recuerdos traumáticos del cruce de la frontera. Los bancos crujieron cuando los hombres asintieron. “Dios está ahí afuera”, dijo Ruiz. “Pero hay llamas en todas partes a nuestro alrededor, y el humo hace que sea muy difícil de ver”.

Durante la primavera y principios de verano, el celular de Ruiz sonaba sin cesar. La gente perdía su trabajo, pasaba hambre, enfermaba, moría. “Era como si hubiera comenzado una guerra”, me dijo. Un hombre llamó a Ruiz a altas horas de la noche, después de pelear a puñetazos con su casero por el alquiler que no podía pagar ya que había perdido su trabajo. Ruiz escuchó de un inmigrante indocumentado que había estado viviendo durante varios días con el cadáver de su hermano en el apartamento que compartían; temía llamar a las autoridades de la ciudad pero no podía pagar a una funeraria para que recuperase el cadáver. Las autoridades de Guerrero buscaban regularmente consejos sobre cómo repatriar los restos de los lugareños que habían fallecido en Nueva York.

La pandemia ha devastado comunidades de inmigrantes y minorías, y mató a negros y latinos a tasas mucho más altas que el resto de la población; la recesión subsiguiente, en la que la ciudad de Nueva York ha perdido más de un millón de puestos de trabajo, los ha dejado desproporcionalmente sin empleo. Los indocumentados no califican para las prestaciones de desempleo o la indemnización por despido, y están excluidos de los programas de ayuda federal diseñados para aliviar el golpe financiero del coronavirus. Según la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante, trescientos setenta y seis mil trabajadores y cuarenta y siete mil dueños de negocios son indocumentados. Aunque el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo se jactan habitualmente de sus logros progresistas, ninguno ha financiado un fondo de ayuda para los indocumentados, a diferencia de gobiernos municipales y estatales en California, Oregón, Washington y Connecticut.

El templo Church of the Good Shepherd, en Bay Ridge, Brooklyn, ha servido de base de operaciones para las actividades de ayuda por la pandemia. Fotografía de Gaia Squarci para The New Yorker

En abril, la Open Society Foundations, la organización filantrópica fundada por el financiero liberal George Soros, donó veinte millones de dólares a la ciudad para ayudar a los inmigrantes. "Fue una intervención humanitaria", me dijo Gregory Maniatis, director de la Iniciativa de Migración Internacional de la organización. "Pero vamos a satisfacer solo una pequeña parte de la necesidad de la comunidad". El plan era impulsar las donaciones de otros filántropos, ya que los asesores del alcalde, que señalaban un déficit presupuestario, consideraban imposible gastar dinero público en asistencia directa en efectivo a neoyorquinos indocumentados. Sin embargo, hasta ahora ningún otro donante ha contribuido al fondo y el gobernador ha mantenido su distancia. "Cuomo no va a ganar o perder una elección debido a este problema", me dijo un funcionario municipal.

VIDEO FROM THE NEW YORKER

Searching for the Bones by the Southern Border

to find a young man
from Nicaragua:

Para Ruiz, el hecho de que el estado no ayude a cientos de miles de personas en situación desesperada es el último recordatorio de que los inmigrantes más vulnerables de la ciudad siempre han estado solos. Desde los años ochenta, me dijo, los centroamericanos se han visto cada vez más apretujados por la prensadora de la política de inmigración estadounidense y sus efectos cotidianos: trabajos mal pagados, aumento del costo de vida, operaciones de control de la inmigración en constante expansión. Ahora, dijo Ruiz, los inmigrantes se preguntaban si los beneficios de venir a Estados Unidos superaban los costos. Dijo: "Creo que estamos por llegar a la etapa en la que las cosas se estén poniendo tan malas que las personas que han sacrificado todo para venir aquí y trabajar en la ciudad de Nueva York duden si realmente vale la pena".

Ruiz llegó a Estados Unidos en 1986, con sus propias dudas. Tenía dieciséis años y estudiaba para ser sacerdote católico en un seminario en San Luis Potosí, un estado en el centro de México, donde nació y se crió. Sus padres y cinco hermanos se habían mudado a Paterson, Nueva Jersey, más de un año antes, pero él no había querido irse con ellos. "Los mexicanos tenemos un sentido ambivalente del norte", me dijo. (Le gusta citar un dicho popular: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos"). Finalmente visitó a su familia con una visa de turista y planeaba regresar a casa para continuar su instrucción, pero dejarlos por segunda vez le resultó demasiado difícil.

Después de que expiró su visa, cayó en un limbo legal que duró ocho años. Durante ese tiempo, atendió a la escuela secundaria, la universidad y el seminario, pero no obtuvo un número de seguro social hasta los veinticuatro años. Su familia, que había ingresado al país legalmente, perdió su estatus luego de no poder renovar sus visas. "Mis padres estuvieron en las sombras por los primeros dieciocho años de sus vidas en Estados Unidos", me dijo. "Hay otro mundo aquí, la vida subterránea, la vida clandestina". Descubrir la necesidad de curas bilingües para apoyar a esta población fue una epifanía para Ruiz, y una de las razones por las que decidió quedarse en Estados Unidos. Él y su familia finalmente obtuvieron tarjetas de residencia, pero nunca se despojó completamente del sentimiento de indocumentado. "Estás desconectado de la manera oficial y formal de hacer las cosas", dijo. "Ignoras la ley. No la estás rompiendo, no intentas hacerlo. Pero está la sensación de que haces algo ilegal todo el tiempo y eso comienza a filtrarse en la vida cotidiana".

En 1993, era un joven seminarista que vivía en el lado norte de Chicago cuando se hizo amigo del poeta y sacerdote jesuita Daniel Berrigan y su hermano, Philip, quienes habían cumplido condena en prisión por su activismo contra la guerra de Vietnam. Estaban involucrados con el Movimiento de Trabajadores Católicos y se oponían ferozmente al militarismo y los excesos del capitalismo estadounidense. "Pusieron sus cuerpos en juego y mi espíritu se despertó", me dijo Ruiz. En América Latina, a partir de los años sesenta, un movimiento religioso conocido como la teología de la liberación llevó a los sacerdotes católicos a luchar contra las élites autoritarias por la igualdad económica y los derechos humanos. Ruiz, que había estudiado con uno de los fundadores del movimiento mientras vivía en Estados Unidos, encontró su expresión en las decaídas ciudades industriales de Indiana, donde predicaba en español los fines de semana. "En las ciudades de todo el país, había una clase de personas invisibles que trabajaban en los restaurantes, limpiaban las casas", dijo. "¿Somos una iglesia si excluimos a estas personas?"

Unos años más tarde, después de regresar a la diócesis de Paterson, Ruiz fue destinado a una serie de pequeñas iglesias en la zona rural de Nueva Jersey. Al viajar entre pueblos como Parsippany, Sparta y Morristown, conoció a cientos de trabajadores agrícolas indocumentados que vivían en moteles miserables al borde de las carreteras y no tenían atención médica ni protección laboral. Ruiz persuadió a un hospital local para que administrara una clínica móvil en una autocaravana donada, y organizó un pequeño grupo de sacerdotes para formar lo que llamó el Ministerio de Migrantes. “Era una parroquia flotante”, dijo. “Una semana estaríamos en el área de Newton, una semana haríamos una misa en Parsippany. Se movería así, según donde estuvieran las poblaciones”. Si había algo que la iglesia católica tenía en abundancia era bienes raíces: las congregaciones en pueblos de mayoría blanca prestaban sus iglesias a Ruiz para sus servicios religiosos. “La manera de involucrar al mundo es el evangelio social que dice que Dios se encuentra en los oprimidos, en los márgenes, más allá de nuestros límites. Para ser realmente una iglesia, debes ser relevante para tu comunidad. De lo contrario, solo somos un grupo de fanáticos y fundamentalistas”, dijo.

A principios de la década de 2000, Ruiz y el obispo que supervisaba la diócesis de Paterson estaban enfrascados en una serie de disputas sobre la necesidad de respetar la jerarquía de la iglesia y seguir las prácticas formales; sintió que el obispo quería que restringiese su trabajo pastoral a su propia parroquia y suavizase sus posturas políticas. Sin embargo, la mayoría de los desacuerdos eran personales y la iglesia puso a Ruiz en licencia. Se mudó a Nueva York, donde vivió dos años en el Hotel Chelsea, y comenzó a trabajar con un grupo de defensa de latinos llamada Asociación Tepeyac, que impulsaba una reforma migratoria integral. En Washington, las conversaciones legislativas comenzaban en una nueva atmósfera: el Departamento de Seguridad Nacional nació en 2003 y recibía recursos sin precedentes para llevar a cabo arrestos y deportaciones en nombre de la seguridad del país. El compromiso tradicional que contemplaron los líderes del Congreso—un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados a cambio de estrictas medidas de ejecución—les pareció a algunos defensores de los derechos de los inmigrantes una apuesta con recompensa incierta.

Al poco tiempo, Ruiz se enfrentó a su jefe. (Este es un tema recurrente en su vida profesional; rara vez se ha quedado en un trabajo por mucho tiempo). Ruiz argumentó que los compromisos y los acuerdos legislativos socavaban todo el sentido de la reforma migratoria. En términos políticos, él estaba claramente equivocado, dada la composición del Congreso y la cautela del debate nacional; en términos morales, sintió que el caso era irrefutable. “Les dije ‘amnistía’ sería la palabra que necesitamos reivindicar: amnistía total, en el sentido religioso de la palabra”, recordó. Ese fue, por décadas, un tabú bipartidista en Washington. Los legisladores tendían a tolerar la compasión en la política de inmigración solo si pudieran acentuarla con dureza; el resultado fue un esquema en el que se financió la vigilancia para preparar el escenario para las medidas de legalización, que nunca se materializaron. “La tentación no está entre lo malo y lo bueno”, dijo Ruiz, parafraseando una lección que había aprendido de los Berrigan. “La tentación está entre lo bueno y lo mejor”.

En 2006, lanzó un nuevo proyecto, con Donna Schaper, pastora de la Judson Memorial Church en Washington Square, un tradicional hogar de activismo progresista en la ciudad. Llamada Coalición Nuevo Santuario, fue un resurgimiento del movimiento activista de los años ochenta que había albergado a refugiados centroamericanos que huían de regímenes militares respaldados por Estados Unidos. La idea era formar una coalición de clérigos, abogados y activistas en toda la ciudad para brindar asistencia legal a quienes se encontraban en procedimientos de deportación y para acompañar a los inmigrantes cuando tenían citas en la corte o en la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “La ausencia de perdón está escrita en el corazón de las leyes de inmigración”, me dijo Schaper. El trabajo de la coalición, dijo, era restaurar el sentido de dignidad humana a la ley y hacer frente a la nueva realidad del Departamento de Seguridad Nacional. En palabras de Ruiz: “¿Cómo nos interponemos en el camino de esta maquinaria, para desacelerarla?”.

Ruiz no era de los que delegaban tareas, y se detenía a ayudar a alguien que conocía en la calle aunque llegase unas horas tarde a una reunión programada. Su estilo espiritual indisciplinado irritaba las necesidades organizativas de la Coalición Nuevo Santuario a medida que se expandía en la era Trump. En 2018, el personal creció de cuatro a trece personas, y la coalición ahora tiene un presupuesto de un millón de dólares y cinco mil voluntarios capacitados. Ruiz admite que administrar una organización de este tamaño era menos atractivo que crear otra desde cero y comenzar cada día con un renovado sentido de lucha contra viento y marea. “Muy pocos de nosotros podemos hacer lo que él puede hacer”, dijo Schaper. Cuando le pregunté qué quería decir, mencionó su “semejanza a Cristo”, que parecía ser tanto una fortaleza como una debilidad.

Para entonces, dijo Schaper, Ruiz vivía su verdadera vocación, como un “sacerdote renegado”. Se retiró de la iglesia católica romana y se convirtió al luteranismo. Cuando lo conocí, en 2017, no lo hubiera reconocido como pastor si no fuera por el entorno: estábamos en la iglesia Holyrood, en Washington Heights, donde ayudaba a una madre guatemalteca y a sus dos hijos pequeños que buscaban refugio de los agentes de inmigración. Llevaba un bolso de lona, vestía jeans, botas de motociclista y un largo suéter de lana. Y se movía con una energía tan implacable, casi como la de un niño, que era difícil imaginarlo llevando una vida de contemplación. Sin embargo, llegué a pensar que solo una persona profundamente espiritual podría trabajar tan fanáticamente como él. “Le podría vender la Biblia al diablo”, me dijo una vez. Briones, su esposa, comparte sus intereses en la inmigración y el activismo pero no es particularmente religiosa. Nunca está sin su cámara o un cuaderno. En 2011, vino a Nueva York para un estudio etnográfico que estaba escribiendo sobre una familia indígena de las montañas de Veracruz que migraba a Flushing, Queens. La familia la consideraba como una de los suyos, a pesar de que era de Hidalgo, el estado al norte de la Ciudad de México.

En 2018, Ruiz dejó la Coalición Nuevo Santuario para encabezar la parroquia El Buen Pastor, una congregación luterana de menos de cien miembros. La iglesia solía atraer a residentes de clase media cuyas familias habían vivido en Bay Ridge durante generaciones. Cuando Ruiz llegó, hubo una afluencia de inmigrantes de habla hispana y muchos de los antiguos feligreses se fueron. Ruiz vio esto como una transición inevitable. Bay Ridge estaba en proceso de cambio, y ahora la iglesia también. El reverendo Luis Barrios, pastor de la iglesia Holyrood y viejo amigo de Ruiz, me dijo: “La mayoría de las personas, a medida que envejecen, se vuelven más conservadoras. Juan Carlos sigue volviéndose más radical”.

Después de comenzar el trabajo, Ruiz y algunos miembros de la junta de la iglesia decidieron organizar una cena semanal para que los feligreses conocieran a su nuevo pastor. Lo llamaron *Breaking Bread* con J.C. (Compartiendo el pan con J.C.), una metáfora que Ruiz, un encantador muy consciente de su propio magnetismo, podría llevar a cabo. “Él es sacramental hasta los huesos”, me dijo Schaper. “Piensa que todo es sagrado. Él hace lo que sea en el momento”.

La mañana del 19 de mayo, unas cincuenta personas con cubrebocas se reunieron en la esquina de la calle Cuarenta y dos y Quinta avenida en Sunset Park, Brooklyn. Un organizador de Comunidades para el Cambio de Nueva York, un grupo activista local, usó un megáfono para instruirlos a mantener el distanciamiento social. Más tarde esa semana, la legislatura estatal consideraría un plan para suspender la cobranza del alquiler en Nueva York, y los activistas de toda la ciudad organizaban manifestaciones simultáneas en apoyo a la propuesta.

Para Ruiz, el llamado a la cancelación del alquiler fue una especie de reivindicación: las acciones radicales para salvar a la comunidad ahora se veían como la única forma de avanzar. Pero, cuando fue el turno de Ruiz de dirigirse a la multitud, habló en términos abstractos, alternando entre español e inglés. “¿Por qué tenemos tantos pobres entre nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué ya victimizamos a los más vulnerables?”, dijo. “Ya tenemos un virus en nuestra sociedad. El racismo. La exclusión. ¡El coronavirus no causó esto!”.

Donaciones de alimentos preparadas en la iglesia para las personas que no pueden salir de casa. Fotografía de Gaia Squarci para The New Yorker

En los márgenes de la multitud, una madre y su joven hija estaban inclinadas sobre un trozo de cartulina amarilla cortada en forma de cruz. La hija estaba escribiendo un nombre con marcador negro: Fernando Zempoalteca. Cuando terminó, llevó la cruz a uno de los organizadores, quien la colgó en una cerca a lo largo de la acera. La madre, Verónica Díaz, de treinta y cuatro años y con cabello largo y ojos oscuros, lloraba suavemente. Zempoalteca, un trabajador de la construcción de veintidós años, quien murió de coronavirus en abril, era su sobrino. Quedaban su novia y su hijo de dos años. La novia, de poco más de veinte años, llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco y cuando Zempoalteca murió estaba embarazada de cinco meses de su segundo hijo; iban a casarse en mayo. "Lleva muerto más de un mes, pero mi sobrina aún le habla en voz alta como si estuviera en el apartamento con ella", dijo Díaz.

Díaz había tenido a sus dos hijas pequeñas sin salir de casa, pero su vecino ofreció llevarlas al mitin en su carro. Por mil doscientos dólares al mes, la familia alquila dos dormitorios en un apartamento de cuatro habitaciones, que comparten con otros tres inquilinos. Al comienzo de la pandemia, Díaz perdió su trabajo limpiando casas en Park Slope y no había podido pagar el alquiler en tres meses.

A pesar de sus precauciones, Díaz había contraído la COVID-19 a fines de marzo. Tenía fiebre alta y no podía respirar si se acostaba, así que dormía sentada en cuclillas, acurrucada a lo largo del alféizar de la ventana de su dormitorio. A medida que su estado se deterioraba, sus hijas le suplicaron que fuera al hospital. Cuando finalmente aceptó ir, le dio instrucciones a su hija mayor, que tiene catorce años, para que se mudara con su hermana al apartamento de su tía, en el Bronx, en caso de que ella no regresara.

En el hospital, una enfermera le dijo que podría ser internada y enviada a cuarentena o podría correr el riesgo en casa. Optó por lo último, y tomó de seis a siete pastillas (Motrin, Tylenol, a veces ambas) cada cuatro horas, durante varios días, para intentar bajar la fiebre. "En cierto momento, el mayor riesgo era intoxicarme con todos los medicamentos", dijo. "Pero funcionó".

Díaz y sus hijas ahora viven de las donaciones de la iglesia: miembros de una congregación local les entregan una caja de alimentos cada quince días. "Tratamos de que dure", dijo. Solía enviar de doscientos a trescientos dólares cada ocho días a sus hermanas y su madre, que estaba en diálisis, en México. Pero sus ahorros se terminaron y en abril tuvo que dejar de hacerlo. Mes y medio después, su madre murió. "Crucé un desierto para llegar aquí. Pensé que era lo peor que había experimentado en mi vida", me dijo Díaz. "Pero no, esto es lo peor: estar estancada". Ahora ha vivido en Estados Unidos durante dieciocho años, más de lo que nunca vivió en México, y sus hijas, que nacieron aquí, son ciudadanas estadounidenses. "Deberían tener una oportunidad", dijo. "Pero no puedo ayudarlas. Esto no es vivir. Esto es apenas sobrevivir".

Cada día, a la hora del almuerzo, frente a la iglesia de Ruiz se forma una fila de mujeres con carritos de compras y bolsas que se extiende por Bay Ridge Parkway. Llegan camiones con comida de tiendas de abarrotes y restaurantes cuyos dueños conocen a Ruiz, y un equipo de voluntarios, muchos de ellos mexicanos recién desempleados, distribuye vegetales, granos y productos enlatados en cajas de cartón. La mañana del 1 de junio se apilaron mil cajas de tomates frescos en el salón de banquetes de la iglesia y los voluntarios llamaban a Ruiz, que vestía pantalones capri y chancletas, el "rey del tomate de Nueva York".

Antes de la pandemia, los inmigrantes de toda la ciudad habían creado asociaciones para hacer frente a las emergencias del vecindario. La mayoría de las veces, las situaciones involucraban redadas del ICE: se enviaban mensajes de texto masivos para advertir a las personas que no salieran y las iglesias daban la bienvenida a cualquiera que no se sintiera seguro en casa. Cuando la pandemia llegó, estos grupos cambiaron su enfoque. Recaudaron dinero para enviar los restos de las víctimas de la COVID-19 a sus familias en México y entregaron comida a las personas que estaban atrapadas en casa y comenzaban a morir de hambre.

VERONICA ZEPEDA
MARCOS A. ORTIZ

En la iglesia, las cruces recuerdan a las personas que han muerto por el coronavirus. Fotografía de Gaia Squarci para The New Yorker

Fabiola Mendieta, una organizadora comunitaria mexicana de treinta y ocho años que también trabaja en la oficina del Defensor Público de la ciudad de Nueva York, conoció a Ruiz hace cinco años, cuando su hermano fue deportado. ("Ve a buscar a Juan Carlos", le dijo su hermana cuando su hermano estaba detenido). En marzo, Mendieta formó una organización de ayuda mutua llamada Grupo de Apoyo Comunitario de Inmigrantes de Brooklyn, que en dos meses recaudó casi diecinueve mil dólares y entregó alimentos a más de cuatro mil personas. Su número de teléfono circuló entre familias hambrientas que buscaban ayuda en las redes sociales. Una llamada fue de una mujer de treinta y cinco años que vivía con su bebé y su niño pequeño en una habitación alquilada en Kensington, al sur de Prospect Park. Mendieta la encontró demacrada, su cabello se caía en mechones. "Estaba pasando hambre, estaba asustada, pero sus vecinos no sabían nada", dijo Mendieta.

Para la primavera, la iglesia de Ruiz, donde Mendieta es feligresa, se había convertido en la principal base de operaciones del grupo. Pero Ruiz, que pasaba horas de su tiempo en la coordinación de pedidos de comida y en hacer entregas a domicilio, comenzaba a sentirse en conflicto con el trabajo. "Vamos a vivir con este desastre durante meses y meses", me dijo una noche, después de hacer la entrega final del día. “Quiero que estemos haciendo más, algo más duradero. No podemos simplemente convertir la iglesia en una despensa de alimentos permanente”.

Se encontró en una posición habitual, atrapado entre realizar un triaje y planear una acción más radical. La pandemia expuso los límites del uno y la impracticabilidad del otro, así que Ruiz intentó ambas cosas: contrató a tres trabajadores para que realizaran tareas en la iglesia, desde carpintería hasta cocinar almuerzos, y les pagó en efectivo. Pero también les pidió que se unieran a una cooperativa que estaba tratando de formar, que estaría “completamente documentada”, dijo; pagaría impuestos y operaría con un presupuesto modesto, mientras servía como un colectivo para que los trabajadores mancomunasen sus recursos. “Podríamos traer más gente para diferentes trabajos”, dijo. “Y los trabajadores estarían protegidos. Podrían recibir atención médica, por ejemplo”. Una noche a principios de junio, Ruiz y su esposa se reunieron con dos feligresas en una oficina sin ventanas de la iglesia. Las mujeres propusieron una campaña de recolección de ropas: miembros de la comunidad donarían prendas viejas para que la cooperativa las convirtiera en bolsas de supermercado y cubrebocas. Podían venderlos a bajo precio en actividades y reuniones de la iglesia.

Se suponía que la cooperativa volvería a reunirse la noche siguiente, pero ese día el alcalde De Blasio impuso el toque de queda a las ocho. Tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en Mineápolis, a finales de mayo, decenas de miles de manifestantes inundaron las calles de Nueva York.

Una tarde poco después, estaba en la iglesia con Gerardo y Joel, dos mexicanos amistosos y alegres de treinta y tantos años, que habían trabajado en la construcción antes de perder sus empleos cuando la ciudad entró en confinamiento. Estuvieron en la iglesia todo el día, descargaron camiones de reparto y distribuyeron alimentos. Fue un trabajo voluntario, con beneficios que se ajustaban a su orgullo. Cuando Ruiz y los demás hicieron una pausa para un breve almuerzo de pozole, hecho en la cocina del sótano de la iglesia, Gerardo y Joel recibieron porciones generosas, y Ruiz insistió de forma casual que se llevaran algunos comestibles a casa.

Llevaban cajas a la Cuarta avenida cuando pasaron cerca de un centenar de manifestantes de Black Lives Matter, que se dirigían a una manifestación al final de la cuadra, rodeados de camionetas de la policía y decenas de agentes a pie. Cuando los policías se acercaron, los manifestantes gritaron más fuerte y levantaron carteles. Gerardo y Joel retrocedieron en silencio hasta el vestíbulo de la iglesia, a la espera de que pasara la multitud antes de continuar su trabajo.

Se supone que la policía no debe realizar arrestos por motivos de inmigración en Nueva York, sin embargo, en las ciudades con un gran número de manifestantes se han enviado agentes de inmigración para el control de las multitudes. “Cuando eres indocumentado, no puedes correr riesgos”, me dijo Luis Reyes, de cuarenta y siete años y padre de tres hijos. Había pasado por la iglesia ese día para mostrarle a Ruiz una factura que había recibido de un crematorio en Nueva Jersey, donde había llevado los restos de su mejor amigo, quien murió de COVID en abril. Ruiz ayudaba a Reyes con los arreglos, y cada vez que Reyes recibía más papeleo, lo llevaba a la iglesia; le tranquilizaba consultar con Ruiz.

Reyes trabaja en un mercado de pescado en Manhattan. Su jornada laboral termina a las siete y media, media hora antes del toque de queda, y el trayecto hasta Sunset Park, donde vive, toma más de una hora en metro. Las dos primeras noches de esa semana, había decidido tomar un taxi de treinta dólares a casa. Mientras se sentaba en la parte trasera del auto, se dio cuenta de que la situación era insostenible: ganaba solo doscientos dólares a la semana. Amigos en puestos similares habían dejado de ir a trabajar; después de unos días, viajar al trabajo les costaba más dinero del que ganaban.

Al día siguiente, Ruiz condujo su Toyota Prius blanco para recoger a un mexicano desgarbado de veintiséis años llamado Erick Díaz-Cruz de la casa de su madre, en Gravesend, y llevarlo al hospital Maimonides para recoger algunos documentos de una cirugía reciente. En febrero, Díaz-Cruz había viajado a Nueva York con una visa de turista para visitar a su madre. Una mañana, dos agentes de ICE vestidos de civil llegaron para arrestar al novio de larga data de su madre quien, según ICE, antes había sido deportado dos veces y enfrentaba una nueva orden de expulsión por una condena por agresión en 2011. Díaz-Cruz salió para averiguar qué estaba pasando y uno de los agentes le disparó en la cara. Díaz-Cruz se sometió a una serie de operaciones de emergencia y él y su familia finalmente demandaron a ICE. Mientras un equipo de abogados en Manhattan manejaba el caso, la familia se acercó a Ruiz en busca de orientación y asistencia práctica.

En el carro, Díaz-Cruz quería saber más sobre las protestas policiales en toda la ciudad. “La vigilancia racista es una parte importante de la historia en este país”, le dijo Ruiz. “Lo que te pasó, lo que ICE hizo, es parte del mismo sistema. Es por eso que debemos hablar sobre tu caso, para que la gente pueda ver las conexiones”. En la primavera, Ruiz había pegado un cartel escrito a mano en el parabrisas. “Libérenlos a todos”, decía, una referencia a las treinta mil personas en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos. Ahora, el letrero también se aplicaba a los cientos de manifestantes de Black Lives Matter arrestados cada día en Nueva York; Ruiz los llamó “prisioneros políticos”. “Pasa por la iglesia, te organizaremos una rueda de prensa”, le dijo a Díaz-Cruz, quien se iba a reunir con sus abogados luego de la parada en el hospital. Un equipo de filmación de Telemundo estaría allí esa tarde. “Puedes hablar sobre lo que has pasado”.

Cuando Ruiz y yo regresamos a la iglesia, afuera esperaba un reportero de Telemundo, vestido con traje y mascarilla quirúrgica; sostenía un micrófono al final de una larga vara negra de metal. Un camarógrafo salió de detrás de una camioneta y comenzó a filmar mientras Ruiz hablaba. Se puso de pie, con las manos a los lados, respondiendo en voz alta y uniforme mientras los peatones se abrían a su alrededor. Gerardo, Joel y Próspero, los voluntarios de la iglesia, bajaron las escaleras para mirar de lejos. No podían escucharlo, pero no era necesario. ♦

(*Traducción de inglés a español por Sabrina Duque.*)

Este artículo fue publicado en inglés, en la edición impresa del 24 de Agosto del 2020, con el título “Higher Calling”.

Jonathan Blitzer es escritor en The New Yorker.

Published in the print edition of the August 24, 2020, issue.

Jonathan Blitzer is a staff writer at The New Yorker.

More: Coronavirus The Coronavirus's Economic Impact

THIS WEEK'S ISSUE

Never miss a big *New Yorker* story again. Sign up for This Week's Issue and get an e-mail every week with the stories you have to read.

Enter your e-mail address

Your e-mail address **Sign up**

By signing up, you agree to our User Agreement and Privacy Policy & Cookie Statement.

Read More

MAGAZINE

HOW THE PENTAGON STARTED TAKING U.F.O.S SERIOUSLY

For decades, flying saucers were a punch line. Then the U.S. government got over the taboo.

By Gideon Lewis-Kraus

CULTURE

JOHN SWARTZWELDER, SAGE OF "THE SIMPSONS"

The first major interview with one of the most revered comedy writers of all time.

By Mike Sacks

MAGAZINE

PERSUADING THE BODY TO REGENERATE ITS LIMBS

Deer can regrow their antlers, and humans can replace their liver. What else might be possible?

By Matthew Hutson

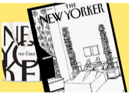
SCIENCE

INSIDE INDIA'S COVID-19 SURGE

At a hospital in New Delhi, supplies and space are running out, but the patients keep coming.

By Dhruv Khullar

The stories that matter.
The humor you need.



Subscribe for unlimited access, plus get a free tote.

Subscribe

Cancel anytime.

© 2021 Condé Nast. All rights reserved. Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy and Cookie Statement and Your California Privacy Rights. *The New Yorker* may earn a portion of sales from products that are purchased through our site as part of our Affiliate Partnerships with retailers. The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with the prior written permission of Condé Nast. Ad Choices